

En fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de México, en la cual, entre otros puntos se sometió a consideración de dicho cuerpo colegiado la respuesta a la petición de información que requirió el C. JUAN JUAN JUAN, mediante la solicitud con el número de registro número 00497/PJUDICI/IP/2017.

En ese tenor, comunico a Usted el Acuerdo Cuarto aprobado por el Comité de Transparencia que a la letra dice:

Acuerdo para atender la petición registrada con el folio 00497/PJUDICI/IP/2017, presentada por el C. JUAN JUAN JUAN.

Vista la solicitud de mérito a través de las cuales se peticiona lo siguiente:

“EN VIRTUD DE LA RESPUESTA A MI SOLICITUD Y QUE MAÑOSAMENTE RESPONDES EL ULTIMO DIA Y SOLICITAS PRORROGA Y ACLARACIONES PARA RETRASAR MAS EL DERECHO DE ACCEDER A DOCUMENTOS PUBLICOS EN MASNOS DE SUEJTOS OBLIGADOS. SOLICITUO LO SIGUIENTE: EXPEDIENTE LABORAL DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANAPRENCIA RECIBOS DE NOMINA DE TODO EL AÑO CERTIFICACIONES DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA OFICIOS ENVIADOS EN LO QUE VA DEL AÑOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA”
(Sic)

La información fue requerida a la Directora de Personal, quien a través del oficio número 3013402000/1372/2017, del trece de septiembre de dos mil diecisiete, remitió a la Titular de la Unidad de Transparencia la versión pública del expediente laboral, con la documentación que acredita el nombramiento de la servidora pública en cita en la solicitud.

Considerando

Primero.- De una interpretación literal de lo que dispone el artículo 143 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se considera información confidencial aquella que contenga datos personales.

Segundo.- Las documentales contenidas en el expediente laboral son las siguientes:

- Oficio de nombramiento número 6271, de fecha 22 de agosto de 2017.
- Acta de nacimiento.

- Certificado médico.
- Título y cédula profesional.
- Carta de no inhabilitación.

Asimismo, la Directora de Personal remite lo siguiente:

- Documento que contiene el informe de percepciones y deducciones que contiene la VERSIÓN PÚBLICA de la información referida en los recibos de nómina expedidos a favor de la servidora pública a que hace referencia la solicitud, con apego a los rubros indicados en el criterio 15/2006 del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los cuales se encuentran: nombre del servidor público, puesto asignado, área de adscripción, así como el periodo de pago, el sueldo bruto que corresponde a la suma total de percepciones y el sueldo neto al que le fueron restadas las deducciones señaladas en el propio documento, todo ello de la primera quincena de septiembre de 2017.

Apoya lo antes expuesto el criterio 03/2004, sostenido por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

DATOS PÚBLICOS DE LOS TRABAJADORES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. SI EXISTE LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR UN DOCUMENTO EN EL QUE SE CONCENTREN AQUÉLLOS, AUN CUANDO EL ÁREA O UNIDAD NO CUENTE CON EL MISMO, EN CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AQUÉL DEBERÁ ELABORARSE.

Si se solicitan datos relacionados con los trabajadores que laboran en un órgano del Estado, en caso de que la unidad respectiva no haya elaborado un documento en el que se concentre la información requerida, a pesar de que cuenta con la atribución para ello; tomando en cuenta la cantidad de documentos que deben consultarse para obtener esa información, debe concluirse que el derecho de acceso a la información garantiza que el referido documento se ponga a disposición del solicitante y del público en general.

De una interpretación de los criterios invocados, se advierte como válida la entrega de un documento elaborado, con la finalidad de satisfacer el acceso a la información pública, siempre y cuando en este se encuentre la información pública de interés solicitada por el peticionario.

En este sentido, del análisis de las documentales referidas se advierte que las mismas contienen datos personales e información que se refiere a la vida privada de la Titular de la Unidad de Transparencia, consistentes en datos de identificación del acta como lo es el folio y código de barras, fecha de nacimiento, nombres de los padres, edad y nacionalidad de los padres, información biométrica y de salud, cédula profesional, R.F.C., cuya protección es un deber legal de éste sujeto obligado.

Tercero.- En concordancia con lo anterior, el artículo 6º, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Ello es así, en virtud de que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como es el caso de la protección de datos personales, que si bien constituye un derecho para las personas, lo cierto es que éste sujeto obligado debe actuar con responsabilidad en el tratamiento de dicha información de índole privado.

Con base en los motivos y fundamentos expuestos, lo procedente es que el Comité de Transparencia apruebe la VERSIÓN PÚBLICA del expediente laboral y del recibo de nómina (de la primera quincena de septiembre de 2017) de la Titular de la Unidad de Transparencia.

Cuarto.- Éste mismo criterio ha sido adoptado por el INFOEM, al hacer referencia que la información que se proporcione debe otorgarse en VERSIÓN PÚBLICA, es decir, eliminando los datos personales que identifiquen o hagan identificable a una persona física.

Lo anterior, porque toda aquella información sensible de uso personal, son datos considerados como *confidenciales*; luego entonces, la VERSIÓN PÚBLICA de los expedientes laborales debe emitirse previa supresión de los datos personales y de todos aquellos que se estimen de uso exclusivo de su titular, ya que con la puesta a disposición de datos de esa naturaleza, se falta a la finalidad de protección de los mismos, por lo que al suprimir los datos personales en los documentos generados por éste sujeto obligado, conforme lo marca la normatividad aplicable en la entidad, no se vulnera el derecho de acceso a la información ejercido por el solicitante.

Quinto.- Respecto a la clasificación de datos personales, es pertinente mencionar que, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, debe entenderse por “Datos Personales”:

Artículo 3.- *Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:*

...

IX. Datos personales: *La información concerniente a una persona identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

...

La protección de la vida privada es un derecho reconocido por diversas disposiciones internacionales de las cuales México forma parte, entre las que se encuentra la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dispone en el artículo 11, fracción 2: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma el derecho a la vida privada como límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona, al establecer en el artículo 16 que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Por su parte, los artículos 6 y 7 Constitucionales establecen como límite a la manifestación de las ideas y a la libertad de imprenta respectivamente, el ataque a los derechos de un tercero y el respeto a la vida privada. La libertad de expresar o publicar pensamientos, encuentra entonces una restricción cuando con ello se afecte a la persona. Asumiendo que los datos personales se encuentran dentro de la esfera de la vida privada de una persona y que ésta debe ser protegida, surge el deber del Estado de brindar protección a los datos personales de los ciudadanos.

Ahora bien, el concepto de privacidad ha evolucionado a nivel internacional a partir del uso de las tecnologías de la información, las cuales permiten que la información concerniente a las personas físicas sea tratada, es decir, recabada, utilizada, almacenada y transmitida para diversos fines tanto en el sector público como en el privado, existiendo la posibilidad de generar en ocasiones, amenazas a la privacidad, derivadas de las injerencias arbitrarias o ilegales en dicha esfera de las personas.

Como ya se enunció anteriormente, ante la llegada en la escena internacional de un nuevo actor, la tecnología, diversos ámbitos de la vida privada, pública, económica y social, se han visto beneficiados por las facilidades que ésta ofrece dada la creciente importancia en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos personales.

Pero al mismo tiempo surgen nuevas amenazas a la privacidad, derivadas de las casi ilimitadas posibilidades de intromisión y acopio de datos personales, sin que el propio interesado esté consciente de que la propia información es manipulada y utilizada de diversa manera y por distintos actores, día con día.

En pleno desarrollo de la era digital, y de una economía basada en el conocimiento, ya que la información se traduce en poder, los gobiernos han sido conscientes de que los datos personales, siendo la fuente de las transacciones comerciales, también involucran derechos humanos fundamentales.

Actualmente existe un desarrollo normativo y doctrinal a nivel internacional acerca de un nuevo derecho concebido como derecho a la protección de datos personales, el cual es considerado como un derecho fundamental.

El concepto de datos personales, de manera genérica, se refiere al conjunto de informaciones sobre una persona física.

De manera que el derecho a la protección de datos personales, se traduce en el reconocimiento y establecimiento de prerrogativas, principios y procedimientos para el tratamiento por parte del Estado o de terceros, de la información concerniente a personas físicas.

Las prerrogativas son el derecho a ser informado de la existencia de bases de datos que contengan su información, a otorgar su consentimiento libre, expreso e informado para la transmisión de dicha información, así como el derecho de oponerse a que sean utilizados y finalmente, a solicitar que se corrijan o cancelen (derecho al olvido) cuando así resulte procedente.

Los principios de protección de datos internacionalmente aceptados varían en cuanto a su denominación y alcances, y en México se han reconocido en el ordenamiento jurídico normativo los relativos a licitud, calidad, acceso y corrección de información, seguridad, custodia y cuidado de la información y consentimiento para su transmisión. Estos principios permiten que los datos sean actualizados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines por los que fueron recabados, que se soliciten de manera lícita; que se dé a conocer a la persona qué información suya obra en bases de datos, quién es el responsable de su tratamiento y de qué manera puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de datos; que a dicha información sólo tenga acceso el titular de los datos, a menos que otorgue su consentimiento libre, expreso e informado para que otros conozcan su información; y finalmente, que existan medidas de seguridad que garanticen la custodia e integridad de la información.

Los procedimientos deben establecer mecanismos institucionales para poder ejercer los derechos antes descritos, es decir, deben existir las vías y autoridades que garanticen la tutela de la privacidad.

En cuanto a este rubro, la Ley en la materia establece lo siguiente:

Artículo 3. *Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:*

...

XLV. Versión Pública: *Documento en el que se elimina, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso;*

Sexto.- En conclusión de lo argumentado, proporcionar en VERSIÓN PÚBLICA la información con la que institucionalmente se cuenta, no entra en contradicción con la idea de que se permita el acceso a los documentos de los que emana la información requerida, pues lo importante de transparentar dicha información es conocer el quehacer gubernamental.

En las circunstancias apuntadas, el Comité se pronuncia de la manera siguiente:

ACUERDO CUARTO:	<p>Se aprueba la VERSIÓN PÚBLICA de las documentales contenidas en el expediente laboral de la Titular de la Unidad de Transparencia, así como del documento que contiene la información pública de su recibo de nómina.</p> <p>La documentales que integran dicho expediente deberán ser entregadas a la parte solicitante, debidamente digitalizadas vía electrónica.</p> <p>Se instruye a la titular de la Unidad de Transparencia para que haga entrega a través del SAIMEX, de la información solicitada a la parte peticionaria, en los términos descritos en el presente proveído.</p> <p>SE APRUEBA POR UNANIMIDAD</p>
----------------------------	--